

EL BIENESTAR CONTRA EL ESTADO: PREMISAS Y CONSECUENCIAS DE LA REFORMA DEL ESTADO DE BIENESTAR

Por EDUARD TARNAWSKI

SUMARIO

EL ESTADO DE BIENESTAR COMO PROBLEMA.—EL ALCANCE Y LAS MEDIDAS DE UN EXPERIMENTO.—EL DETERIORO DE LA ESFERA PÚBLICA Y LA VUELTA A LA TEMPRANA EDAD MEDIA.—LA LÓGICA DE LA DEMOCRACIA RADICAL.—LIBERALISMO CONTRA NEOLIBERALISMO.—EL *OLIVO CONTRA LA SOZIALMARKTWIRTSCHAFT*.—LA RELIGIÓN COMO CUSTODIA DE LA MORAL.—LA Treta BIENESTARISTA CONTRA EL ESTADO.—LA ALTERNATIVA: LA *SOCIEDAD DE BIENESTAR (Y SU COSTE)*.—EL TRABAJO COMO BIENESTAR.—EL EMPLEO TOTAL Y LAS DIFERENCIAS SOCIALES AGUDAS.—LA POLÍTICA CARCELARIA COMO POLÍTICA SOCIAL.—EL BIENESTAR SEXUAL.—EL BIENESTAR POR EL CASTIGO DEL VICIO.—LA VIGILANCIA DE LOS INMIGRANTES.—LA VIGILANCIA DE LOS ESCOLARES.—LA MENTALIDAD DE VIGILANTES.—EL NUEVO ORDEN SIMBÓLICO.—EL DISCURSO RACISTA.—LA IMPOSICIÓN COMUNITARISTA.—LAS EXPECTATIVAS FEMINISTAS.—LA INFERENCIA DE *NEW AGE*.—CONCLUSIÓN.—BIBLIOGRAFÍA.

Entre las medidas destinadas a reformar el Estado de bienestar hay unas que abiertamente marginan el Estado. Sin embargo los politólogos no parecen muy preocupados por el hecho de que la historia del Estado esté llegando a su fin; se parecen en esto a Sancho Panza cuando decía que el «Estado» no lo ha inventado nadie, porque ha existido siempre, y por lo tanto no hay nada que lo pueda poner en cuestión. Pero las reformas del Estado de bienestar son mucho más que unas simples mejoras de la gestión pública. En realidad se trata de lo que se denomina una reforma institucional. Este estudio analiza las premisas de esta reforma para pasar inmediatamente a adelantar algunas posibles consecuencias que sugieren el inminente nacimiento de lo que será la nueva fórmula para edificar ese poder que vendrá «después del Estado».

La crítica del Estado de bienestar es tan antigua como él mismo. Fueron los ortodoxos liberales, entre ellos Hayek, los primeros en ver, ya en 1944, en cualquier intervención del Estado en la economía y la vida social la senda que conducía al autoritarismo. El mismo argumento lo utilizaron después Friedman, Buchanan y Tullock. Todos ellos estaban convencidos de que la libertad de los individuos encuentra su expresión sólo en el Mercado. Esto no les impedía darse cuenta de la gravedad de los problemas sociales, en las que veían precisamente el principal argumento contra el Estado de bienestar, al que responsabilizaban de ellos.

Aquella crítica era y sigue siendo el primer impulso para pensar sobre la reforma del Estado de bienestar. Cuando se dice, por ejemplo, que en Alemania un 3,3 por 100 de la población depende de la ayuda social, es decir, que la existencia de 2,73 millones de personas supone un gasto de aproximadamente 50 mil millones de DM, se está esgrimiendo un argumento para justificar la decisión no de aumentar esa cuota sino de recortarla (*Frankfurter Allgemeine* de 25 de marzo de 1997, pág. 1). De la misma manera al decir que un 20 por 100 de los niños norteamericanos viven en hogares con ingresos anuales por debajo del nivel de pobreza se indica no la necesidad de incrementar los recursos, sino por el contrario de ir contra la política de bienestar empleada hasta ahora. En esta afirmación nadie pudo ser más concluyente que los autores del informe que avalaba las reformas que preparaba el presidente Clinton (Shonkoff, 1995).

Efectivamente el programa de reformas lanzadas en 1996 por el gobierno de Clinton recoge una década entera de este tipo de críticas liberales. No hay un argumento más liberal que aquel que se usa para proponer medidas para prevenir la consolidación de una clase social condenada a la dependencia permanente del Estado de bienestar.

Lo que sí es totalmente novedoso respecto de las críticas liberales y lo que distingue a Clinton de todos sus antecesores en el cargo, es su convicción de que no se puede ganar la guerra contra la pobreza. De hecho no se trata de convicciones sino de tomar conciencia de la realidad. Los datos son concluyentes. En Estados Unidos hay más pobreza después de décadas de Welfare Policy de la que había antes. En 1996 las estadísticas gubernamentales calificaban a 36,5 millones de personas como pobres. En el mismo año 12,6 millones recibieron asistencia en concepto de ayuda familiar.

Clinton quiere ofrecer alguna oportunidad a los pobres, pero no está dispuesto en absoluto a incrementar el valor de las contribuciones públicas para hacer la pobreza menos dolorosa para los individuos. Así, la primera medida de su proyecto de reformas fue precisamente el recorte de dinero previsto para favorecer a las madres solteras. La ley, conocida como Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act de 1996, recibió el nombre The Welfare Reform Act y constituye la síntesis de la filosofía de la reforma del Estado de bienestar, aunque regula sólo una parte de la política social. La reforma tiene como objetivo inmediato

conseguir que la ayuda a las madres solteras que tengan a sus cargo niños dependientes vuelvan cuanto antes a sus puestos de trabajo. Es éste un planteamiento rigurosamente coherente con la filosofía liberal. La ley no podía ignorar que, por ejemplo, en las últimas cuatro décadas la proporción de niños americanos nacidos fuera del matrimonio ha aumentado más de siete veces, desde el 4 por 100 en 1950 al 31 por 100 en 1993.

Al plantear la reforma del Estado de bienestar sus autores afirman el fracaso de las políticas del igualitarismo y de la estrategia de redistribución de la riqueza que se encontraba en el planteamiento inicial del Estado de bienestar. Los hombres de izquierda tienen que dar por fracasados sus proyectos al comprobar que el Estado de bienestar no ha dejado a las sociedades de Occidente más igualitarias. No hay más que ver que precisamente en Gran Bretaña y Suecia, los campeones de las políticas de *welfare*, no se ha conseguido el objetivo de acortar las distancias entre clases. En 1992 el 24 por 100 de la población en Gran Bretaña vivía en o por debajo de los ingresos definidos como bajos «below Income Support», mientras que este indicador en 1979 se refería al 14 por 100 de la población (Wilding, 1997, 725).

EL ALCANCE Y LAS MEDIDAS DE UN EXPERIMENTO

No se puede hablar de reformas del Estado de bienestar en plural, a pesar de que efectivamente han ido apareciendo en muchos países a lo largo de dos décadas siendo incluso un tema preferido de la Política Comparada (Borchert, 1996), pues se trata de un fenómeno universal, indivisible. Esto no quiere decir que no se tenga que tener en cuenta las variedades nacionales. Todo lo contrario, precisamente para verlo como un fenómeno universal conviene empezar diciendo que el rol de pionero lo ha tenido no el país más avanzado, sino uno de la periferia. El borrador de lo que hoy día se entiende por la reforma del Estado de bienestar lo elaboró el gobierno de Chile ya a finales de los setenta y principios de los ochenta (Mesa-Lago, 1997, 497). La experiencia chilena sirvió no sólo como base conceptual para diseñar reformas del sistema de pensiones en el resto de los países de la región (Michell and Barreto, 1997), sino que se convirtió en punto de referencia para toda la gama de reformas que se dieron en otras partes del mundo pero sobre todo en los países más adelantados.

La reforma es un experimento social y, además, de la escala de las grandes revoluciones del siglo xx. Su propósito es comparable sólo al de la revolución rusa. Esto quiere decir que la espontaneidad, la imprevisibilidad de las acciones de los que han sido sus protagonistas ha sido reducida al mínimo. No se sabe hasta qué punto el protagonismo de las masas en la revolución rusa fue mayor que en la reforma del Estado de bienestar actual, pero sí que los que han sido sus artífices intelectuales, en el segundo caso tienen más posibilidades de conseguir sus objetivos. Para reformar el Estado de bienestar no se necesita un partido de revolucionarios profesionales, sino unos profesionales de las ciencias sociales que —como los viejos revolucionarios—

rios— conviertan la sociedad entera en un objeto de experimento, lo cual no resta entusiasmo y fervor a los que van a sufrir los sacrificios que impone la reforma.

Al prolongar el tiempo real de la reforma a unas dos décadas, intentando a la vez ensayar las medidas en situaciones extremadamente diversas, la reforma tiene las máximas garantías de éxito. Por eso empezó en Chile en la década de los ochenta, porque éste era entonces un país cuya situación política permitía el uso indiscriminado del poder, al estar saliendo de la grave crisis que se apoderó de él en la década de los setenta y que lo redujo a la condición de un esquema políticamente tan simple como es siempre una dictadura.

La reforma, una vez superado su primer examen en Chile, pudo ser trasladada a otro país que se encontraba en una fase de redefinición de todos sus principios: Gran Bretaña. Su gobierno, presidido por Margaret Thatcher, se prestó para lanzar una gran campaña contra la «burocracia del welfare provision» (Wilding, 1997, 716).

En la segunda mitad de los ochenta la experiencia chilena y británica pudo ser trasplantada a los países escandinavos, que entraban en su propia etapa de reformas de sus instituciones, entre las cuales la del Estado de bienestar era la más emblemática (Cox, 1997).

El carácter de experimento social que reviste la reforma del Estado de bienestar en ninguna parte del mundo resulta tan evidente como en los mismos Estados Unidos. Siguiendo la regla principal de todo experimento —empezar siempre en unas condiciones que permitan una óptima supervisión de la prueba— lo que en 1996 se conoció como una política del gobierno federal, había sido tanteada una década antes en uno de los estados de la unión, en Wisconsin, que precisamente no destaca por la gravedad de sus problemas sociales. Allí, el entonces recién elegido gobernador, Tommy Thompson, inició en 1987 una serie de cambios en la gestión pública, cuyo objetivo era reducir el gasto de ayuda social y a la vez incorporar a los receptores de ayudas al trabajo (Gueron, 1996; Wiseman, 1996, 516). Sus experiencias las pudo observar muy de cerca otro gobernador, esta vez de Arkansas, Bill Clinton. Éste, al conocer los buenos resultados del experimento, así como el apoyo por parte de la administración de los presidentes Reagan y Bush, incorporó en su campaña electoral de 1992 el slogan *Ending welfare as we know it* (Wiseman, 1996, 531). La reforma como tal se puso en marcha en 1996 con la ley que recortó las ayudas previstas para madres solteras que tienen a sus cargo niños, justo una década después de que el Presidente Reagan en 1996 animase a los norteamericanos en su discurso sobre el State of the Nation a la reforma del Estado de bienestar (Wiseman, 1996, 520).

La reforma del Estado de bienestar no ha dejado de ser un experimento en ningún momento. Una de las fases decisivas que ha atravesado se inició después de la victoria laborista en 1997. Sus elementos más significativos los formuló el gobierno británico de Tony Blair el día 26 de marzo de 1998 en el documento llamado *New Contract for Welfare* (*The Economist* de 28 de marzo de 1998, pág. 14). La reforma en el Reino Unido del Estado de bienestar tiene especial trascendencia debido a que el Estado de bienestar fue precisamente inventado en su versión original en el Reino Unido.

La reforma del Estado de bienestar plantea unos cambios tan radicales que puestos en práctica llevarían a la misma suspensión de éste. Las condiciones para un experimento de esta magnitud las ofrece sólo Europa del Este (Castello Branco, 1998), por encontrarse en una fase en la que ya no funcionan las viejas instituciones y todavía no han aparecido las nuevas, lo cual ofrece un terreno abonado para poner a prueba las ideas más audaces.

Resumiendo, el nombre de reforma del Estado de bienestar incluye una serie de cambios que se pueden agrupar en cuatro grupos:

1. *Medidas de austeridad*, se identifican con la retirada de unos servicios sociales por considerarlos demasiado lujosos y que por falta de recursos no pueden ser suministrados. Así en Suecia se retiró la asistencia dental de adultos del sistema de la salud pública y en España se recortó la lista de medicamentos subvencionados por el Estado. Sin embargo la reforma más radical se produjo en Estados Unidos. La principal ley aprobada en el marco de la *Welfare Reform* de 20 de agosto de 1996 exigía de las personas que hasta entonces recibían bonos de alimentación que trabajasen 20 horas semanales para tener derecho a beneficiarse de esta medida. En total el Estado pretendía reducir a la mitad sus gastos sociales.

2. *Reformas de las pensiones*, consisten en la privatización del sistema estatal de pensiones. En éstas fue pionera la experiencia de Chile, inmediatamente implementada por las de Gran Bretaña y Estados Unidos. El clásico sistema de pensiones conocido como «pay-as-you-go», es decir, aquel según el cual la generación activa en el trabajo pagaba las pensiones a los que se iban a retirar, es sustituido en sus diversas modalidades por otro en el que la generación en activo se hace responsable de recoger fondos para cubrir los gastos de sus pensiones, la responsabilidad en esta materia recae así en las personas individuales, no sin que esto provoque resistencia. Por ejemplo en Alemania se mantiene el sistema clásico sin ningún cambio, pese al considerable déficit. En Rusia y Ucrania en cambio, se está planteando la posibilidad de acabar por completo con el sistema de pensiones estatales. En Polonia y Hungría se ha votado en 1998 un sistema de pensiones mixto.

3. *Descentralización administrativa*, se produjo en los países que junto a la política de reforma del Estado de bienestar llevaron a cabo una profunda política de descentralización. El sistema de prestaciones sociales fue descentralizado en Bélgica y Canadá, pero también en otros países que explícitamente no tienen en su agenda política temas de descentralización por razones lingüísticas hubo descentralización, como por ejemplo en Holanda. Lo más importante de estas reformas es que la política social pasó a ser la preocupación no sólo de los gobiernos regionales y municipales, sino incluso de aquellas empresas que se muestran dispuestas a emplear a los parados juveniles o de larga duración por expresa petición de gobiernos como es el caso de Estados Unidos y Gran Bretaña.

4. *Lucha contra el paro y la marginación*, es probablemente el elemento más significativo de la reforma de Estado de bienestar. Sería un error muy elemental pensar que la reforma se puede identificar sólo con los recortes presupuestarios. El objetivo ha sido cambiar el sentido de las prestaciones sociales, darles otro valor.

Por lo tanto la campaña de incorporación de los parados a la vida laboral en Estados Unidos y Reino Unido conocida con el slogan *welfare to work*, o la notable ampliación del gasto público en la educación y sanidad públicas anunciadas en julio de 1998, por un lado, y el amplio programa de lucha contra la marginación en Francia, la campaña por la semana laboral de 35 horas, por otro, forman parte de la reforma en tanto en cuanto medidas de austeridad o de descentralización.

EL DETERIORO DE LA ESFERA PÚBLICA Y LA VUELTA A LA TEMPRANA EDAD MEDIA

Si la reforma en Estados Unidos significa reducir las prestaciones sociales, en España, limitar su alcance, y en Francia ampliarlas, habrá que preguntarse si acaso bajo el mismo nombre no se están englobando cosas distintas. O, yendo más lejos, si la reforma del Estado de bienestar, aun guardando cierta relación con la política social estatal, en el fondo lo que hace es abrir un brecha hacia un nuevo mundo donde el Estado será irrelevante. Si se puede hablar de un asalto al Estado en el marco de las reformas del Estado de bienestar, éste es en todo caso el resultado final de un largo proceso que ha durado un cuarto de siglo y que ha consistido en continuas embestidas contra la esfera pública.

El primer escenario de dichos ataques fue en Estados Unidos en la década de los setenta. En aquel entonces no se hablaba todavía de la reforma del Estado de bienestar, y mucho menos en los términos actuales. El antiestatalismo ya estaba presente pero no en la forma en que lo conocemos ahora. No eran los representantes del establishment los que atacaban al Estado, sino unos intelectuales de la izquierda que con sus críticas de la política del gobierno en general alimentaban las furias populares contra la política exterior o en materia de integración racial y social.

La reforma del Estado de bienestar se produce pues en la tercera década de grandes movilizaciones sociales alrededor de unos temas promovidos por los movimientos antirracista y pacifista, que han acostumbrado a los americanos a pensar que se puede prescindir del Estado. A la vez el fracaso de los proyectos originales de estos movimientos lo han interpretado como que la Política no es la esfera adecuada para los grandes debates sobre principios. Ahora la retirada del Estado de la política social les parece un paso natural, pues en todos estos años gradualmente de hecho han ido marginando la Política de sus vidas. Esta indiferencia la ilustra la notoria falta de interés en Estados Unidos por las elecciones, que ha llegado a sus límites históricos con la participación por debajo del 50 por 100 en las elecciones presidenciales, del 40 por 100 en las elecciones al Congreso y del 15 por 100 en muchas de las municipales o locales (Boggs, 1997, 746).

A este deterioro de la esfera pública en la cultura norteamericana han contribuido conjuntamente la derecha y la izquierda. En el antiestatalismo coinciden los fundamentalistas cristianos, los antiabortistas o los grupos de presión de la derecha como la National Rifle Association, etc., con la vieja izquierda liberal. Todos ellos están contra el *big government*. El fin del socialismo real en el Este ha servido en bandeja

muchos argumentos para rechazar cualquier iniciativa que parta del gobierno del Estado. Derecha e izquierda son en sus proyectos igualmente hostiles a la gestión del gobierno estatal, al que ambos tachan de corrupto. Este ataque conjunto de los dos polos políticos contra el Estado ha hecho posible que ahora Bill Clinton pueda presentarse como el continuador de la política de Reagan y Tony Blair, en último término de Thatcher. Pues ya son cuatro los que coinciden en afirmar que el Estado no es la solución sino el problema.

Abundando en lo dicho más arriba, cada vez resulta más evidente que la reforma del Estado de bienestar que encabeza Clinton no es un ejemplo más del *American exceptionalism*, sino que ha sido concebida como un proyecto universal en el que la vieja izquierda busca su nueva ubicación. La *welfare reform* es el proyecto político en virtud del cual pasará a la historia la polarización derecha-izquierda. Es muy significativo que el discurso del *State of the Nation* de 1998 de un presidente demócrata como es Clinton haya sido aplaudido cien veces por un Congreso de mayoría republicana. Para acabar, son pocos los norteamericanos de la derecha que piensan que si Robert Dole ganase las elecciones satisfecería mejor sus aspiraciones políticas.

El deterioro de la esfera pública en Estados Unidos no acabó en absoluto con el Estado norteamericano, pero sin ninguna duda sí fue decisivo para acabar con el Estado enemigo, Rusia. Así, lo que hubiera podido quedar en un simple objetivo más de la política internacional norteamericana, adquirió rango de esbozo o diseño del tan deseado por muchos poder no-estatal. Del mismo modo, también lo que se está produciendo en Rusia tiene carácter de avanzadilla o modelo para el futuro del resto del mundo, incluyendo los países más desarrollados. Si Vladimir Shlapentokh estableció el paralelismo entre la situación actual de Rusia y los tiempos inmediatos después de la desintegración del imperio carolingio, yo diría, apoyándome precisamente en su tesis, que Rusia con su vuelta atrás a hace mil años proyecta el futuro de los demás. En 1991 Rusia salía de una mentalidad que reconocía la absoluta supremacía de lo público, para llegar al punto donde se encontraba Europa hace mil años. En la Rusia de hoy la frontera entre lo privado y lo público no está definida, si es que en absoluto existe esto en la vida de los políticos. En la Rusia de hoy como en la Europa de hace mil años, dice Shlapentokh, «la propiedad y el poder están íntimamente entrelazados y es a menudo imposible separarlos. Del mismo modo que los emisarios reales convirtieron sus distritos en feudos privados en lugar de usarlos para servir al rey, los oficiales rusos han tendido a hacer lo mismo con sus puestos en la jerarquía. En la Rusia moderna los burócratas a todos los niveles usan su poder político para ejercer el control sobre la propiedad, mientras que los ricos cambian el dinero por el poder para controlar las decisiones políticas» (Shlapentokh, 1996, 394).

LA LÓGICA DE LA DEMOCRACIA RADICAL

La reforma del Estado de bienestar no tiene nada de lo que podría ser una acción apresurada, presionada por las circunstancias de unos cuantos gobernantes sin rumbo y sin ideas. Se trata de un proyecto bien meditado. Y la principal idea que, a mi parecer, lanzó a los reformistas del Estado de bienestar por los mares del pensamiento político es la misma que descubrieron al principio del siglo XIX en Inglaterra los demócratas radicales. En las distintas leyes aprobadas en el marco de la reforma del Estado de bienestar se encuentran fosilizadas las intuiciones de Jeremy Bentham, que han permanecido inertes, momificadas como el propio cuerpo de su autor, esperando durante años la ocasión de ser desincrustadas.

Bentham se declaraba radicalmente ajeno al idealismo y trascendentalismo y desde esta postura se dispuso a diseñar la única democracia posible: la democracia radical. Pensaba que ésta se puede construir con sólo cumplir dos premisas: la primera, atribuir al pueblo la titularidad de la soberanía, y la segunda, dejar que el mismo pueblo delegue las funciones políticas en una minoría de individuos, elegidos directa o indirectamente, cuya actividad consistiría en conseguir que el soberano sea lo más feliz posible. Al entender por «el pueblo» un conjunto de individuos, Bentham daba una definición numérica de la felicidad: cuantas más personas felices hubiese, más feliz sería el pueblo.

En la lógica de la democracia radical no cabe una categoría como la de voluntad general. Basta con que la mayoría sea feliz. Con ensanchar el cupo de gente feliz ya se cimienta la democracia. En estos momentos en que la democracia sufre una gran crisis es natural que los políticos como Blair recurran a Bentham porque sólo él les enseña cómo servirse de la fortuna de las elecciones que les aseguraron la inmensa mayoría de los votos. Quizás incluso piensan que están en mejores condiciones que Bentham de conseguir la gran reforma de la humanidad. Bentham soñaba con conseguir de un solo golpe reformar la moral, preservar la salud, revigorar la industria, difundir la instrucción, aliviar las cargas públicas, edificar la economía sobre roca, desatar, en lugar de cortar, el nudo gordiano de las leyes sobre los pobres; todo esto, mediante la construcción de un proyecto arquitectónico que era una cárcel, el *Panopticon*. Los políticos de la cuerda de Blair parecen querer conseguir lo mismo por la vía de las reformas del Estado de bienestar en el plazo de tiempo en que sigan teniendo la mayoría parlamentaria.

Lo que más pudo inspirar a Blair o a Clinton en sus proyectos de reformar el Estado de bienestar, era aquella idea de Bentham de que el gobierno tiene la obligación de regular la sociedad de tal manera que los hombres, movidos por su propio interés, creen más felicidad (Roberto, 1974, 188). La filosofía de las reformas que proponen se resume en obligar a los que hasta ahora eran unos receptores de las ayudas sociales y cuya felicidad dependía de los demás, pierdan la seguridad de conseguirla así y luchen por alcanzarla por sí mismos.

Otro punto de coincidencia entre el proyecto de Bentham y las ideas que están en el trasfondo de la reforma del Estado de bienestar es la persecución de un objetivo

que por definición no es ilusorio. Bentham y los reformadores del Estado de bienestar no creen en la posibilidad de resolver todas las cuestiones pendientes relativas a la vida social, la democracia y la educación, pero sí que piensan que la única manera de reformar el mundo es mediante la legislación. Bentham en 1820, como Blair hoy, se creía dotado del genio de un legislador del talante de Solón, que siempre estaba dispuesto a irse a cualquier parte del mundo para emprender un grandioso experimento social (Stark, 1965, VIII-XIX). Bentham ofreció sus servicios de legislador a Rusia, América latina e incluso a España, que parecía más interesada en su proyecto carcelario que su propia patria.

Naturalmente todos los que se proponen objetivos tan ambiciosos levantan sospechas, como era el caso de Spencer quien veía en las ideas de Bentham lo más contrario a la libertad. Es cierto, Bentham no consiguió convencer a sus coetáneos, que veían en sus proyectos todo lo contrario de lo que predicaba en sus textos. Muchos, ya en el siglo XX, pensaban incluso que era un déspota más, un precursor del totalitarismo.

Lo que no se puede negar es que Bentham era un filántropo. En cuanto a su visión de libertad, quizá lo que sorprende es que decía sin ningún tipo de pudor que no es verdad que los hombres sean libres o iguales ni que posean por naturaleza derecho alguno de propiedad (Pendas García, 1988, 317). Ciertamente hoy en día nadie se atreve a confesar algo parecido, tampoco los reformadores del Estado de bienestar. Sin embargo desde su militancia progresista, izquierdista son los primeros en denunciar los vicios de la libertad, algo que los hombres de la izquierda no habían hecho antes. Siguiendo los pasos de Bentham los reformadores del Estado de bienestar llegan a un descubrimiento copernicano: la gente quiere la libertad no como un valor superior, sino como el medio para obtener seguridad. La democracia radical que propugnan se reduce a propuestas encaminadas a garantizar a los individuos la máxima seguridad.

En otra faceta coinciden los utilitaristas y los partidarios de la reforma. Ni Bentham ni Blair muestran ningún sentimentalismo respecto a los pobres. Ambos ven por otro lado que es imposible afrontar problemas vitales de la sociedad moderna sin procurar resolver los problemas que crean los pobres. Lo que tienen en común el proyecto de la ley sobre los pobres de Bentham y la reforma del Estado de bienestar es que ambos se plantean como meta realista no incrementar la riqueza sino, por el contrario, castigar la pobreza. No se trata de eliminarla, es decir, a lo sumo se puede aspirar sólo a reducir la cantidad de pobres y eso se hace limitando su capacidad de reproducción biológica. Las frases del capítulo de recortes para las madres solteras pobres de la reforma del Estado de bienestar, son un eco de lo que Bentham decía ya en 1801, a saber, que no tiene sentido ninguna política pronatalista, pues precisamente «Mientras más gente haya más pobres serán; mientras menos sean, más ricos serán» (Bentham, 1965, 72).

Lo que habría que destacar especialmente como elemento distintivo de los partidarios de la democracia radical, es que tanto Bentham como Blair, el primero en el *Panopticon*, el segundo en la reforma del Estado de bienestar, creen que han

superado el vicio de las utopías en el pensamiento sobre la sociedad. Los dos se sienten muy orgullosos de no creer en una sociedad ideal. Su gran ventaja frente a los demás consiste, creen ellos, en proponer soluciones lo menos malas posibles.

La democracia radical prevé la exclusión radical y categórica de las desviaciones de todo tipo. La persecución de los que no cumplen con la sociedad puede resultar una excusa inmejorable para establecer un control minucioso, en primer lugar de aquellas personas que son calificadas de *diferentes*. El interés, la curiosidad por los pobres o diferentes, no es una actitud neutral, es el primer paso para tenerlos vigilados. La democracia radical contempla pues el control radical de todos sobre todos y sin dejar ningún espacio sin control. En este sentido los *diferentes* tendrían que recelar de la actitud de tolerancia que manifiestan los legisladores contemporáneos hacia ellos. Los hombres de gobierno del siglo XIX no se dejaron convencer de que en la construcción de una prisión hiciese falta mucho más humanismo y tolerancia, como decía Bentham, y por eso rechazaron su proyecto. Con todo, la izquierda no dejó jamás de creer en Bentham, y ahora en el planteamiento inicial de la reforma del Estado de bienestar ven la oportunidad de conseguir lo que no pudo él: devolver a los pobres la autonomía personal, la libertad. Sin embargo, a finales del siglo XX resulta mucho más fácil rechazar a Bentham, pues hemos sido advertidos por Foucault de que la autonomía y la libertad son sólo la precondition para poder conseguir que los *diferentes* se autocontrolen mejor.

Es cierto que Bentham no era totalitarista, porque no creía en el Estado, pero también lo es que fue el primer institucionalista que pensó en aquella *democracia realista*, en que creen los reformistas del Estado de bienestar, y que consiste en el repudio total del sentimiento de compasión. En la lógica benthamiana no hay lugar para el Estado de bienestar por ser éste en el fondo un sistema que se basa no en la lógica y la eficacia, sino en los sentimientos.

Bentham, que no era ningún optimista idealista, como asegura en su bien fundado trabajo, Janet Semple (1993, 322), tenía un concepto del hombre como criatura responsable de sus acciones, un concepto que comparten los reformadores del Estado de bienestar: el hombre es un ser capaz de tomar decisiones racionales, no es una simple víctima de las circunstancias, como por ejemplo una crisis económica. El hombre utilitarista y el hombre después de la reforma sabrán unir la responsabilidad y el interés. «El hombre utilitarista es por lo menos dueño de su destino; sus pasiones no son ingobernables y puede hacer opciones racionales. Una de ellas es unir el deber con el interés y el panopticon habría demostrado la eficacia de esta unión. Bentham soñaba con una red de semejantes instituciones trabajando en perfecta armonía con la cómoda eficiencia de la ingeniería de precisión» (Semple, 1993, 323). Ése es hoy el sueño de los reformadores del Estado de bienestar.

LIBERALISMO CONTRA NEOLIBERALISMO

Para poder apreciar todas las premisas de la reforma del Estado de bienestar no hay que perder de vista el hecho de que Tony Blair, desde su posición de líder de un viejo partido de trabajadores, encabeza hoy día una nueva y espectacular revolución liberal, cuya idea principal es la misma que la de los liberales del siglo xix. Como éstos tampoco Blair quiere que el Estado sea más que un notario en las tareas de la política social que llevarán adelante, cada uno por su cuenta, esta serie de individuos sueltos que son los héroes de las especulaciones de Bentham del siglo pasado y a la vez de la cultura posmoderna de hoy.

Los liberales de la primera mitad del siglo xix fueron los enemigos del Estado por excelencia. Ahora, al darse cuenta Blair y Clinton de que el Estado está en bancarota y el Mercado no tiene capacidad de organizar la vida social según las recetas de Smith, piensan que hay que abandonar definitivamente a los neoliberales en sus dogmas y volver a sus propias ideas, que preveían que el individuo asumiese toda la responsabilidad sobre su bienestar. Ha sido ésta una de las más acertadas falacias políticas de los líderes del nuevo laborismo: hacerse pasar por neoliberales. Blair no es un neoliberal sino un liberal. Y precisamente de sus convicciones de liberal ha cogido las piezas del programa de la reforma del Estado de bienestar.

El paquete de reformas que contempla el gobierno británico sobre el Estado asume la función de organizar el sistema de los servicios sociales, pero excluyéndose a sí mismo de todo tipo de responsabilidad directa dejando todos los medios en manos de los individuos. Según esta impecable lógica utilitarista lo más natural es exigir que sean los mismos estudiantes quienes paguen sus estudios y los trabajadores sus pensiones.

Los críticos de Blair que le tachan de ser un hombre sin principios ni valores, simplemente no quieren darse cuenta de que éste cree en un proyecto en el que no cabe el Estado. Esto es lo que les cuesta entender a las fuerzas políticas mayoritarias. Respetar el Estado puede ser aún una meta para los socialdemócratas alemanes, pero no para los que quieren volver al mundo de las ideas previas al 1848. Por lo tanto hay que decir que la victoria de los laboristas de Blair en 1997 es ante todo una tremenda derrota del conservadurismo, que efectivamente ha dominado desde 1848 a lo largo del siglo xx. Lo que quiere Tony Blair es que el siglo xxi sea el siglo de los radicales. Para poder recuperar el patrimonio liberal hace falta, y en esto Blair no se equivoca, acabar después de la derrota conservadora con los restos de la izquierda socialista, hace falta volver a pensar, desde la izquierda, como si Marx y Lenin no hubiesen existido jamás. Esta vuelta al liberalismo no es en absoluto un proyecto particular británico o norteamericano conyuntural. Si tanto Clinton como Blair reciben el respaldo para sus proyectos de la reforma del Estado de bienestar por parte de los intelectuales de la izquierda europea, es porque éstos quieren de una vez por todas liberarse de la huella del paternalismo del *New Deal* de Roosevelt y del socialismo de Olaff Palme, para sentarse cómodamente en el sillón del liberalismo que fue la matriz donde se gestaron todas las ideas de la izquierda a lo largo de

los dos siglos. Este camino de retorno pasa precisamente por la reforma del Estado de bienestar. El carácter antisocialista de sus objetivos radica precisamente en el abandono de este tipo de reflexión sociológica que pertenece a la tradición socialista.

En las bases ideológicas de los anteproyectos de la reforma del Estado de bienestar sería difícil encontrar referencias estatistas o nacionalistas propias de los socialistas. Esto es lógico, pues una vez superado el paternalismo conservador la izquierda no tiene ninguna obligación de adornar sus ideas con argumentos progresistas o cristianodemócratas. En el apoyo a la reforma del Estado de bienestar los radicales del liberalismo disfrutaron, por primera vez desde hace un siglo y medio, de un sentimiento de unidad, de compartir el mismo proyecto político, recuperan su viejo dogma «nadie es nadie para decirle al otro lo que es bueno para él».

En su rechazo del viejo Estado de bienestar los radicales del liberalismo de hoy ven la manera más coherente de reconciliarse con el viejo desprecio de los principios a la vez aristocráticos y colectivistas que a lo largo de medio siglo compartieron la derecha y la izquierda, haciendo causa común a favor del Estado de bienestar. Hoy los laboristas de Blair no quieren saber nada de la vieja promesa socialista que habla de igualdad de condiciones (*equality of condition*) que estaba en los fundamentos del Estado de bienestar. Ahora y precisamente gracias a la reforma del Estado de bienestar piensan volver a la idea de igualdad de oportunidades (*equality of opportunity*).

Del liberalismo que está en el trasfondo del proyecto de la reforma del Estado de bienestar dan buena cuenta las manifestaciones recientes del actual director de la LSE, Anthony Giddens. Éste hace tiempo ya se definió como enemigo del neoliberalismo para poder defender el liberalismo, al que considera una fuente inagotable de inspiración para las reformas pendientes. De momento no contamos con ninguna obra completa que pudiese servir de doctrina, sólo con lo que Giddens va dando a conocer en sus publicaciones de prensa, en las que aprovecha para anunciar su próximo libro (Giddens, 1998, 18).

Giddens define sus posiciones ideológicas, que se supone son también la base conceptual del proyecto laborista, así como de lo que es desde hace tiempo la alianza ideológica entre Clinton y Blair bautizada con el nombre «centre-left for the 21st century». Se trata de un proyecto que pasa por alto la división del espectro político en dos polos, izquierda y derecha, que quiere ser una tercera vía, ni la de la vieja izquierda ni la de la nueva derecha (Giddens, 1998, 18), y que está pensada para modernizar el centro. En cuanto al papel del Estado, declara que no es partidario ni de maximizar ni de minimizar su poder, eso sí, dejando muy claro que no acepta las ideas libertarias. «Good Government is essential for its development and expansion.» Giddens, como Blair, quiere que el gobierno no sólo represente sino sobre todo que gobierne. Por eso no ve ninguna paradoja en que el Estado sea un promotor de la sociedad civil. Esto tiene especial relevancia pues Giddens manifiesta de forma inequívoca que no cree en el orden creado por el Mercado (espontáneo), y aboga por crear una nueva economía mixta que enfatice no la propiedad sino la competición y

la regulación. Su fe incondicional en la reforma del Estado de bienestar emana de su convicción de que lo primero que se debe conseguir es invertir en capital humano.

Para Giddens el Estado de bienestar no debe ser un proyecto definido en términos negativos, defensivos. En la nueva política de bienestar hay que poner énfasis en lo positivo, es decir, en la acción de los entes públicos (Giddens, 1998, 21). De sus afirmaciones no es difícil deducir que se trata de un conjunto de ideas nacidas en el seno del planteamiento posmoderno y promovidas por unos intelectuales que aprovechan la crisis económica que se cierne sobre Occidente a finales de los sesenta para plantear en términos catastrofistas las limitaciones naturales de la humanidad, sea por los peligros de la guerra nuclear o por catástrofes demográficas, económicas y ecológicas. En definitiva se trata de una *Perestroika* que en el lenguaje de la izquierda de hoy se camufla con el nombre el pensamiento mestizo. Es el proyecto que presenta la *izquierda del centro* como una reforma de la vida social y política.

En su consideración de que la vida moderna está repleta de riesgos de todo tipo, y que el control es la única manera de hacer frente al riesgo, estos líderes intelectuales, a diferencia de los de la vieja izquierda, ya no creen en estructuras como el Estado como factor de estabilidad. A su entender un hombre a salvo es aquel que vive su propia responsabilidad asumiendo los riesgos de sus propias acciones y sin poner la mínima expectativa en amparos como los que solían ofrecer el Estado o la Sociedad (Koslowski, 1996, 344). En palabras del mismo Blair, el Estado de bienestar necesita ser reformado porque «La gente quiere mayor control de su propia vida» (*El País* de 7 de abril de 1998, pág. 11).

Los ideólogos y líderes de esta *izquierda del centro* no apuestan por el Mercado, ni por el Estado, ni por la Sociedad. Apuestan por el Control. Y eso es así porque en el fondo tratan al hombre como *algo* y no como *alguien*. Piensan que tiene que ser controlado como un organismo más formado por azar, o eventualmente por una simple necesidad. El hombre controlado y controlador a la vez es un ser sin libertad ni sentido, en definitiva y parafraseando a Julián Marías, una cosa y no una persona. En la búsqueda del bienestar descubre en el Estado su verdadera enemigo, que debe ser eliminado cuanto antes al ser una institución que pretende justificar su papel en la esfera trascendental. Su existencia puede incluso llegar a ser muy molesta precisamente por apelar a la inevitable presencia de la dimensión ética a la hora de valorar todas las instituciones y comportamientos humanos.

EL OLIVO CONTRA LA SOZIALMARKTWIRTSCHAFT

El proyecto encabezado por Clinton y Blair no choca con una oposición fuerte entre las fuerzas políticas europeas por la simple razón de que uno de los 15 gobiernos de la CE, sólo España, tiene conservadores en el poder. Sólo dos ministros del gobierno de Aznar son cristianodemócratas, es más, van de incógnito. Se trata, pues, de una opción política en retirada. Sin embargo los cristianodemócratas pueden resultar particularmente molestos para esta *izquierda del centro* precisamente por

tener un proyecto de reforma del Estado independiente. La idea de la reforma del Estado de bienestar por fuerza choca con la teoría de la *Sozialmarktwirtschaft*. La posición de los cristianodemócratas alemanes es además muy clara. El diseño original de su política social de ningún modo excluye el Estado. Al contrario, hace de él el principal protagonista. Ahora los cristianodemócratas alemanes, solos frente a un mundo hostil, parecen adoptar la postura de testigos de honor recordando que ni Walter Eucken, ni Ludwig Erhard, ni Konrad Adenauer y probablemente ninguno de los cancilleres alemanes de la posguerra aceptaría la perspectiva de ver al Estado reducido en materia de política social al papel de notario de aquella Sociedad de Bienestar que van creando los laboristas británicos o los populares españoles.

El segundo blanco de los reformadores del Estado de bienestar es el socialismo, en la medida en que éste es enemigo del liberalismo radical. Cuando apuntan contra el *Big Government*, están apuntando contra los esquemas políticos socialistas, así como contra las teorías de las que éstos se servían, como la teoría de Keynes. La ausencia de éste es el indicador inequívoco de que la reforma del Estado de bienestar no es socialista.

Combatir a los socialistas resulta incluso mucho más importante que a los cristianodemócratas, pues el estatalismo pertenece a los elementos más significativos de la vieja política socialista francesa o española. El hecho de que el SPD en su programa del 98 recupere las ideas de la acción concentrada del patrón con el sindicato y el Estado evidencia que el estatalismo es inseparable del socialismo. Esta línea choca forzosamente con la de los radicales reformadores de la *izquierda del centro*. Los socialdemócratas sabían luchar contra el capitalismo de Manchester pero éste ha dejado de existir, naturalmente no sólo porque haya menos gente pobre y desprotegida que en el tiempo en que lo denunciaba Engels, sino porque el capitalismo está organizado de otra manera y no necesita a los socialistas para que impidan una revolución comunista organizando un Estado de bienestar. Los capitalistas no necesitan que les proteja un Estado organizado por los socialistas, porque ellos mismos están en condiciones de ofrecerse como protectores de los socialistas. Por eso no están dispuestos a aceptar las extorsiones que cometieron los gobiernos socialistas en Europa. No les vale el argumento de Ernest Lluch de que todos han hecho lo mismo que Salas y Navarro, como dice en *La Vanguardia* del jueves 18 de diciembre de 1997, porque en primer lugar no se sabe si es verdad que otros hayan hecho lo mismo. Pero hay otro argumento más poderoso. La culpa de Salas es que ha hecho algo que no se les permite hacer a los socialistas: ellos no están para extorsionar a los capitalistas, sino para organizar a los trabajadores.

La política de la *izquierda del centro* es mucho más que un experimento diseñado para las dos sociedades anglosajonas. Se da en Italia, donde una coalición de partidos políticos bajo el nombre de Olivo adelantó las ideas de Blair y Clinton, en México, donde ha dado la victoria electoral al alcalde de Cárdena. Aparece en Argentina bajo las siglas Frepaso y en Chile, donde el candidato mejor situado para la presidencia del país es otro hombre de la *izquierda del centro*. Para todos ellos la reforma del

Estado de bienestar es en sí una síntesis de las ideas que pretenden cambiar por completo la noción de la política en el siglo que viene.

LA RELIGIÓN COMO CUSTODIA DE LA MORAL

El Estado de bienestar recibió siempre críticas por parte de la derecha. En la primavera de 1994 Charles Murray en *Public Interest* publicó un artículo titulado «Does Welfare Bring More Babies?» que sirvió como el punto de referencia de la nueva crítica puritana del Estado de bienestar (Murray, 1994). Otro portavoz de esta corriente, Lawrence Mead, había convencido ya antes a gran parte de la opinión pública norteamericana de que era el Estado de bienestar el que había creado una nueva clase social, la de los *non-working poor* (pobres en paro). Según él las medidas de protección social favorecen no a las familias de los trabajadores sino a los que permanecen durante mucho tiempo sin trabajar.

Esta crítica del Estado de bienestar en realidad encubre ambiciones de ingeniería social. Los herederos de los puritanos ingleses del s. xvi corresponsabilizan al Estado de bienestar del s. xx de los embarazos de mujeres que se evitarían, creen, no tanto garantizando ayudas sociales sino con un Estado que cuidase más el nivel moral de sus ciudadanos. Otorgan así al Estado no se sabe qué atributo mágico para fecundar, en particular a las solteras de raza negra (Murray, 1994).

El problema es muy difícil de resolver desde el punto de vista de la teoría liberal, pues ¿cómo puede la política gubernamental en una sociedad libre hacer que los niños nazcan con la máxima probabilidad de dos adultos maduros que se comprometen a cuidar de ellos?

Este Estado liberal, que en otros momentos de la historia basaba su legitimación en la supuesta neutralidad moral, ahora pretende crear su propia versión del Estado de bienestar y darle la misión de restaurar la deteriorada moral de la sociedad. Los argumentos éticos que suelen utilizar son de mal gusto cuando menos. Denunciar, por ejemplo, la moral de la gente que abusa de los servicios que ofrece el Estado de bienestar de por sí no eleva la moralidad de los que lo denuncian. Es decir, los que abusan de los beneficios del Estado de bienestar amparándose en la ética burguesa, que incluye el escabullirse a la hora de pagar, no deberían ser criticados por los mismos burgueses, que hacen lo mismo cuando se niegan a pagar impuestos destinados a la labor social.

De todos modos los críticos puritanos del Estado de bienestar no se privan de la satisfacción de verse a sí mismos en la posición de superioridad moral por no tener que vivir con la ayuda del Estado por el hecho de haber cumplido, creen, con unas reglas tan sencillas como «Acabar el bachillerato, casarse antes de tener un hijo y tener el hijo después de los veinte años. Sólo el 8 por 100 de los hijos de familias que hacen esto son pobres; el 79 por 100 de los hijos de familias que fracasan en esto son pobres» (Wilson, 1998, 28), asegura uno de los principales críticos del Estado de bienestar. Éste es rotundo al afirmar que su meta no es ampliar el sistema

de bienestar sino cambiarlo (Wilson, 1998, 34). Para esta corriente la reforma del Estado de bienestar tiene que ser la vía a seguir para evitar que los que ya son «otra nación», que además crece más rápidamente (Wilson, 1998; 35), no se apoderen de América. La reforma de Estado de bienestar que apoyan pasa por devolver a la religión el papel de guardián de la moral y, si esto no se puede conseguir, conseguir por lo menos que los que se les llama «otra nación» no se multipliquen en el sentido más literal de la palabra.

LA TRETA BIENESTARISTA CONTRA EL ESTADO

Al Estado de bienestar se le reprocha el crear expectativas que por razones económicas no pueden ser satisfechas. Sin embargo el propósito de las reformas va más allá de lo que pudiese ser una saludable liberación de falsas expectativas. La reforma del Estado de bienestar es una conjura contra el Estado. Probablemente empezó a fraguarse en una campaña dirigida por Margaret Thatcher, cuyo objetivo era minar la fe de los ciudadanos en el Estado. Su valor fue extraordinario si se tiene en cuenta la enorme confianza que depositaron los británicos en su Estado durante la segunda guerra mundial y los primeras décadas de la posguerra (Wilding, 1997, 717-718). Esta estrategia la siguen todos los reformadores del Estado de bienestar que no ponen en duda la necesidad del bienestar como tal, pero sí que anteponen a ésta un nuevo dogma: el Estado jamás debe asumir la función de suministrar bienestar. No cuestionan si la tercera edad tiene derecho a ir de vacaciones, pero sí el derecho del Estado a existir. Un economista catalán nos desvela el contenido de esta supuesta conjura cuando propone el Estado de bienestar sostenible como alternativa al existente. Dice lo siguiente: «El Estado de bienestar sostenible ha de ser en primer lugar sostenible, después bienestar y si no queda más remedio Estado» (Molinas, 1996, 3).

Lo que sorprende es que en su crítica despiadada los reformistas den tan poca importancia al hecho de que el Estado de bienestar en su día fuese la más sincera expresión del constitucionalismo socioeconómico y como tal durante medio siglo vertebrase los sistemas políticos de Occidente. No le dan ningún valor al hecho de que las prestaciones sociales del antiguo Estado de bienestar se justificasen como derechos derivados de la ciudadanía y no de la condición de ser pobre, como piensan equivocadamente ahora. Tan obsoleto les parece el argumento de los progresistas como el de los conservadores. En cuanto a los primeros no creen más en el principio progresista de que los derechos políticos de los ciudadanos sean la fuente de sus derechos sociales (Marshal, 1981) «La idea más radical del Informe Beveridge y la posterior legislación entre 1944 y 1948 era la universalidad —los beneficios y servicios deberían ser accesibles a todos como un derecho de ciudadanía, no sólo a los pobres—» (Wilding, 1997, 722). En cuanto a los segundos, no les parece tampoco adecuada la justificación conservadora del Estado de bienestar, según la cual éste

«es una expresión de nuestra solidaridad... expresa nuestro sentido de vida comunitaria» (Willetts, 1992, 141).

La reforma del Estado de bienestar vista como una especie de estrategia de confusión calculada para ocultar el verdadero objetivo que es deshacerse del Estado, es reprochable desde muchos puntos de vista, pero no está fuera de la racionalidad política. Es evidente que el Estado resulta ser un estorbo en la medida en que su existencia impide la consolidación definitiva de la nueva estructura política llamada Comunidad Europea. En la integración europea hay que ver la principal causa de la gradual retirada del Estado, al que se niega la categoría de ser la expresión del poder soberano, concediéndole una modesta función de representar unos intereses subsidiarios. ¿Por qué razón hay que esperar que el futuro del olivo andaluz conmueva los sentimientos de solidaridad por ejemplo de los austríacos? ¿Es que acaso los mallorquines esperan que los centroeuropeos visiten «Ses Illes» por su europeísmo más que por el sol mediterráneo y la cerveza... alemana?

En el mismo orden de cosas hay que recordar que el Estado de bienestar se justificaba plenamente por tener que representar una sociedad homogénea y a la vez enfrentada con otras sociedades homogéneas de otros Estados. En un nuevo mundo que ha optado por el multiculturalismo, donde la política no se basa en la unidad sino en las diferencias, no cabe el Estado con esa misión. Por lo tanto esa idea original del bienestar que ha sido hasta hace poco la igualdad ha perdido toda su fuerza. A partir de ahora si alguna política social activa se ha de implantar tanto por la Comunidad Europea como por los mismos Estados no será para homogeneizar la sociedad sino para diferenciarla más.

LA ALTERNATIVA: LA SOCIEDAD DE BIENESTAR (Y SU COSTE)

La alternativa que contemplan los críticos del Estado de bienestar, sin embargo, por muy ingeniosa que resulte puede ser peligrosa. Están convencidos de que el bienestar ofrecido por la Sociedad es más justo y desde luego más barato, y en su afán por deshacerse del Estado no quieren admitir que la labor social de la Sociedad no se podrá equiparar nunca a la prestación social del Estado en el mundo occidental. En juego están pues las bases del orden político asentado en la tradición democrática de esta civilización. Pero esto no parecía preocuparles mucho a aquellos intelectuales españoles, entre ellos Cristóbal Montoro, luego Secretario de Estado del Gobierno de José María Aznar, cuando proponían sustituir el Estado de bienestar por la Sociedad de bienestar utilizando el siguiente argumento: «En definitiva, la salida de la situación creada por el deterioro del Estado de bienestar debe ser la Sociedad del Bienestar, donde la lógica democrática queda garantizada y reforzada, el Estado redefine su papel hacia la labor inspectora y de garantías básicas, y las fuerzas del mercado se desarrollan en modelos de racionalidad y productividad, sensibilizadas con lo colectivo sin detrimento alguno de lo privado.» (Montoro y Montoro, 1996, 97-98).

Cuando la Generalitat catalana pide por ejemplo que las cajas de ahorro aporten a través de su obra social 1.300 millones de pesetas para programas que hasta ahora había subvencionado Bienestar Social, evidentemente no pone en cuestión la necesidad de la asistencia social, pero tampoco quiere que eso sea la tarea del Estado.

La idea de que sea la propia sociedad la que de forma autónoma se encargue de suministrar el bienestar tiene reminiscencias de aquella *vigilancia* de la que hablaba Foucault. Éste advertía que no hay mejor método para mantener a la gente bajo una vigilancia continua y eficaz que reforzar el papel de la sociedad (Foucault, 1996, 211). Pero que se haga cargo del bienestar de algunos de sus ciudadanos que considera en situación de apuros, no significa que les pueda ofrecer la posibilidad de salir definitivamente de su situación de opresión. Si lo hiciese estaría iniciando una revolución social, y eso no es precisamente el caso.

El bienestar que ofrece por su cuenta la sociedad es propio del Estado de bienestar «prematureo» que hemos citado antes. El bienestar que ofrecían los sistemas del Este a su población era un conjunto de medidas alternativas a la confesada y practicada ausencia de libertades políticas. Las prestaciones sociales que ofrecían por ejemplo las autoridades de China en la época del socialismo más ortodoxo eran, pensaban sus dirigentes, la merecida compensación a la ausencia de esas libertades políticas (Selden and You, 1997).

Resulta llamativo y sospechoso que aquellos a los que se les conoce como grandes enemigos del Estado se muestren tan preocupados por la condición económica de éste. Con ello lo que están haciendo es simplemente presionar para que el Estado se retire de la esfera pública. Pensar que el bienestar gestionado por la Sociedad misma saldrá gratis o más barato es confundir el medio con el fin.

EL TRABAJO COMO BIENESTAR

El pleno empleo no podía conseguirse sólo gracias al crecimiento económico. Lo que en la práctica significaba no sólo tolerar el desempleo sino admitirlo como uno de los factores imprescindibles para elevar el nivel de la productividad. Efectivamente en las economías posindustriales el trabajo ha llegado a perder la función de ser la fuente de crecimiento, pues es obvio que la creación de riqueza suponía reducir puestos de trabajo para poder poner la producción en «manos» de robots. Para poder asegurar un nivel alto de progreso técnico, era necesario reservar una partida de gastos destinada a pagar el coste social del progreso técnico. Esto suponía la separación de mucha gente de sus puestos de trabajo, al creer que su permanencia en los procesos de producción suponía para la economía una carga. Era más rentable mantener a gran parte de la población en paro que sacar ganancias de su trabajo de escaso nivel técnico.

Pero tarde o temprano era inevitable darse cuenta de que el gasto social del paro no corría sólo a cuenta del presupuesto del progreso técnico, sino también del presupuesto de la dirección de prisiones. Es decir, hacía falta redescubrir que el

trabajo no es sólo una actividad para crear riqueza, sino una de las formas más acreditadas de control social. El mérito de redescubrir en el trabajo un instrumento de vigilancia le corresponde al gobernador del Estado de Wisconsin, ya mencionado, Tommy Thompson. Éste al ser elegido gobernador en 1986 lanzó el proyecto de reformas con el fin de reducir la cantidad de personas dependientes de la ayuda social. Efectivamente en los diez años de su mandato la cantidad de familias que recibían ayuda social se redujo de 100.000 a sólo 30.000. El lema *Wisconsin Works* era no dar ayuda social, sino ofrecer puestos de trabajo para todos, pues se suponía que cada persona podía ofrecer algo que fuese útil para su ciudad (Wiseman, 1996).

La experiencia fue inmediatamente adoptada por el gobierno de Clinton en 1993, que lanzó su propia campaña con el slogan *Welfare-to-work*. Se trataba de un proyecto federal para recuperar para el trabajo a gente que vivía de subsidios «moving people from welfare to work». Los resultados de dicha campaña fueron espectaculares, desde 1993 hasta 1997 se pudo incorporar al trabajo a 2,8 millones de personas (Gore, 1997).

A esta experiencia se sumó también una parte de la izquierda europea. La lucha contra el paro se convirtió en la principal preocupación del gobierno holandés dirigido por Wim Kok. Entre las medidas que prefería estaba la reducción de la jornada laboral. Gracias a ella Holanda registra una tasa de paro inferior a un 4 por 100. De todos modos, el más sustancioso resultó ser el proyecto de reducción obligatoria de la semana laboral a 35 horas que adoptó por ley en 1998 el gobierno de izquierda en Francia.

Varios líderes de la izquierda han apostado por la política de reducir el paro, entre ellos Tony Blair, quien ganó en 1997 las elecciones ofreciendo trabajo subvencionado. Una vez establecido en el poder el gobierno laborista presentó el gran plan de empleo para los jóvenes, que tiene como objetivo encontrar y facilitar la formación por lo menos a 250.000 desempleados en edades comprendidas entre los 18 y 24 años. A los jóvenes que llevan en el paro más de seis meses se les propondrán varias soluciones: un empleo subvencionado, un contrato de seis meses en una asociación local, un empleo en una asociación caritativa o formación de un año si están menos cualificados. El gobierno cuenta con unas 4.000 empresas dispuestas a colaborar en este proyecto (*El País* de 7 de abril de 1998, pág. 2).

La principal novedad de la legislación *welfare-to-work* consiste en la reconversión del trabajo en una forma más de prestación social. La reforma del Estado de bienestar en este aspecto vuelve a la definición de pleno empleo de William Beveridge, «tener siempre más puestos de trabajo vacantes que personas desempleadas, en definitiva, crear por el medio administrativo un exceso de demanda, no un equilibrio» (Britton, 1997, 319).

Los actuales líderes de la izquierda, que se definen como la izquierda del centro para diferenciarse de la izquierda de la década de los ochenta, no se dan cuenta que con esto se aproximan a la práctica de los sistemas del Este, donde el trabajo era un bien social en sí y además intransferible, y no la fuente de crecimiento económico. En este sistema el Estado hacía ver que pagaba a los trabajadores y éstos hacían ver

que trabajaban. Se levantaban a las 6 de la mañana no para producir sino para poder convivir y disfrutar su *status* de trabajadores, a falta de poder disfrutar de ser ciudadanos, dadas las graves limitaciones de libertad política.

Se puede suponer pues, que cuando los socialistas franceses o los socialdemócratas alemanes apuestan por la política de pleno empleo a base del recorte de la jornada laboral, en realidad lo que hacen no es justificar una reforma social, sino contribuir a que se valore el empleo no en su función económica sino social. Aunque los economistas aporten importantes argumentos históricos como aquel según el cual el aumento de ingresos hasta diez veces a lo largo de los últimos 120 años en los principales países industriales estuvo acompañado por la reducción de la jornada laboral a la mitad, descartan que la política de la reducción de la jornada tuviese efectos sobre la producción (Bosch y Lehdorff, 1997). Naturalmente estos líderes políticos comprometidos con la reforma del Estado de bienestar hacen lo posible por disimular que en el fondo lo que se pretende conseguir no es sólo el reparto del trabajo como un bien más, sino como un instrumento más para poder ejercer el control social. La izquierda siempre prefería ver a sus adeptos como trabajadores que como ciudadanos. En este nuevo mundo en el que el trabajo ha adquirido el rango de bien y valor superior, ya no hay lugar para el problema de la libertad de elegir entre el trabajar y no trabajar, pues se pone bajo la sospecha de ser antisocial a todo aquel que no trabaja.

EL EMPLEO TOTAL Y LAS DIFERENCIAS SOCIALES AGUDAS

Al general Pinochet no se le puede quitar el mérito de haber sido el gran reanimador de la economía chilena, que hoy en día se conoce por sus altas tasas de crecimiento y empleo. No sabemos sin embargo cuál fue el motivo original que le hizo empeñarse en conseguirlo, acaso no fuese tanto la preocupación por la economía y el bienestar como la búsqueda de medidas de gobierno más eficaces. Y entre ellas se encuentra la alta tasa de empleo, que tiene entre sus consecuencias inmediatas el incremento de las diferencias de renta entre la población.

No es casual que las sociedades donde se acentúan las diferencias sociales suelen apostar por una alta tasa de empleo. Así, la tasa de empleo es mayor en Gran Bretaña que en Alemania, donde las diferencias sociales son menos pronunciadas. España, conocida mundialmente por su alta tasa de desempleo, no destaca en cambio por su igualmente excesiva concentración de la renta. España ha experimentado un cambio espectacular. Entre 1980 y 1990 el 20 por 100 de los hogares más pobres habían aumentado en un 14 por 100 su participación en la renta total. A su vez el 20 por 100 de hogares más ricos había pasado del 41,3 por 100 al 39,7 por 100 de la renta total. En 1980 el 20 por 100 de hogares más ricos tenían casi 6 veces la renta del 20 por 100 de hogares más pobres. En 1990, la relación entre unos y otros era de 4,8 veces.

Hay que decir que España era ya antes mucho más igualitaria que cualquier otro país desarrollado de Occidente. La tendencia reciente a agravar las desigualdades no ha hecho más que acentuar esta característica. En Estados Unidos en 1992 la renta del 20 por 100 de los hogares más ricos era 11 veces mayor que la del 20 por 100 de hogares más pobres (Bel, 1997, 82).

LA POLÍTICA CARCELARIA COMO POLÍTICA SOCIAL

Los gobiernos norteamericanos a lo largo de los últimos treinta años han reconducido la política social hacia lo que podríamos llamar soluciones carcelarias. No se puede sacar otra conclusión si se observa que por ejemplo Tejas, con sus 18 millones de habitantes, tiene la misma población reclusa que Alemania con 80 millones, o que California gasta más en su política de prisiones que en su educación superior pública, con uno de cada seis empleados federales trabajando en el sistema de prisiones. En total en Estados Unidos los presos junto con las personas vigiladas o en libertad condicional superan los 5,5 millones (*El País* de 20 de abril de 1998, pág. 12).

Las estadísticas no indican en absoluto un aumento de la criminalidad aunque los datos son preocupantes. Por ejemplo, en Alemania desde 1970 la cantidad de crímenes que han sido castigados se ha doblado y llega a 6,6 millones anuales. Las partidas presupuestarias para combatir esta lacra pueden ser incluidas perfectamente en lo que en el Estado de bienestar se denomina oficialmente gastos de ayuda a las familias que se consideran criminógenas o para la educación obligatoria de los jóvenes de dieciséis años, eso sí, siempre utilizando la amenaza de recortar las ayudas sociales para los padres de los jóvenes violentos, tal como propuso recientemente el gobierno socialista francés (*El País* de 20 de enero de 1998, pág. 5).

En el nuevo planteamiento que incluye la *welfare reform* una de las medidas más apreciadas es la incorporación directa de los ciudadanos a las tareas policiales. Los grandes éxitos de la lucha contra la criminalidad son el resultado de la estrecha colaboración entre policías y ciudadanos, formando lo que podría llamarse una especie de voluntariado.

EL BIENESTAR SEXUAL

Foucault en su estudio de la historia de la sexualidad definió la clase dirigente como formada por aquellos que limitan los placeres de los otros. Concretamente la clase dirigente en la segunda mitad del siglo XIX, en la época victoriana, eran aquellos que al reprimir el sexo pusieron los cimientos del capitalismo moderno, es decir los burgueses.

Siguiendo esta lógica sabiendo quién reprime el sexo hoy, a finales del siglo XX, se podrá identificar con mucha precisión por quién está integrada la clase dirigente.

El caso del actual presidente de Estados Unidos es paradigmático. El hecho de que el límite a su placer sexual se lo hayan impuesto los medios de comunicación y la justicia delata que son éstos la clase dirigente, disfrazada de detectives morales.

A parte de los dos mencionados, cuya ubicación en la cresta del poder se conoce, hay que redefinir las mutuas medicas, que precisamente ejercen su poder de vigilancia de forma más espectacular al limitar o dosificar el placer sexual de sus clientes. La aparición en marzo de 1998 de la mágica píldora antiimpotencia Viagra en Estados Unidos ha obligado a las aseguradoras médicas a adoptar medidas muy restrictivas. Según el corresponsal de la prensa española la mayoría de ellas considera que *el bienestar sexual* es una cuestión sobre todo psicológica y han puesto un límite mensual a las pastillas que reembolsan a los afectados. Lo que no es otra cosa que estimar cuántas veces al mes un impotente podrá practicar el sexo subvencionado por su póliza. El mecanismo de inspección es cuantitativo —las aseguradoras norteamericanas reembolsan sólo el 50 por 100 del precio del medicamento y no el 80 por 100 como suelen hacer, y cualitativo pues según el estudio sociológico de 1994 *Sexo en América* la cantidad normal sería de ocho pastillas y no de seis como han acordado subvencionar las mutuas (*El País* 30 de abril de 1998, pág. 31).

EL BIENESTAR POR EL CASTIGO DEL VICIO

Los fumadores a través de los impuestos que gravan el tabaco compensan con creces el gasto sanitario que origina su hábito. El coste de las enfermedades de los fumadores asciende a 123.000 millones anuales, mientras que éstos ingresan en las arcas 347.000 millones. En total el Estado español arañó unos 224.000 millones a los fumadores. El peaje de cada fumador a las arcas públicas es de 19.000 al año. Este impuesto sobre el vicio es un negocio redondo si se tiene en cuenta además que el Estado de bienestar ahorra en las pensiones que dejan de pagar a los fumadores por mortalidad anticipada: En 1993 fue de 196.000 millones, una cantidad superior a los 118 000 millones que tuvo que abonar por las pensiones de viudedad, invalidez u orfandad generadas por los fumadores. La tasa de mortalidad asociada al tabaco puede situarse en el 1,1 por 1.000 habitantes al año, una media de 34.000 casos al año. Los fumadores aportan hoy con el impuesto del tabaco medio billón de pesetas anuales, aproximadamente un 18 por 100 del coste de la asistencia pública sanitaria que en este año 1998 será de 3,3 billones (*El País* de 29 de enero de 1998, pág.).

Conclusiones parecidas se pueden deducir del hecho de que por ejemplo el gobierno consiguió ingresar en 1997 más de 28.000 millones de pesetas por multas de tráfico, mientras que el Plan Extraordinario de Seguridad Vial para eliminar 245 puntos negros en las carreteras del Estado costará en el período 1997-2001 unos 38.275 millones (*El País* de 19 de mayo de 1998, pág. 22).

LA VIGILANCIA DE LOS INMIGRANTES

El grupo social que recibe más ayudas sociales para su supervivencia es en gran medida el de los inmigrantes. Sin negar la evidente importancia humanitaria de éstas no se puede ignorar que constituyen ante todo una forma muy eficaz de vigilancia de este colectivo. Los bonos para comida y las viviendas sociales gratis son medidas que permiten mantener a la inmensa mayoría de los inmigrantes bajo el control de las autoridades.

Las medidas de recorte de los privilegios sociales que había adoptado el gobierno de Clinton se reducían de forma casi exclusiva a los inmigrantes mexicanos ilegales. De todos modos nadie puede negar la gravedad de los problemas que trae la inmigración si se tiene en cuenta que los Estados Unidos ganaron 5 millones de ciudadanos en 1995, 4 de los cuales nacieron en este país. El otro 1,1 millón se hizo norteamericano durante el año fiscal. En el marco de las reformas del Estado de bienestar en California se consiguió recortar drásticamente las ayudas prenatales para inmigrantes ilegales, de las cuales se beneficiaron en 1996 en ese estado unas 70.000 mujeres, con un coste de 69,3 millones de dólares, según Lisa Kalustian, de la agencia de salud y bienestar de California.

LA VIGILANCIA DE LOS ESCOLARES

En su admiración por la política norteamericana la izquierda europea ha dejado de considerar la enseñanza como una de las principales responsabilidades del Estado. Si hasta ahora en el sistema escolar alemán no se contemplaba dar un lugar significativo para la enseñanza en las instituciones privadas, las huelgas del otoño pasado pueden influir definitivamente en un cambio. Lo que ha cambiado ya es la política de los laboristas británicos. En el marco de las reformas que lanzó el nuevo gobierno laborista de Tony Blair se encuentra una nueva ley que establece el pago de una parte de las tasas de los estudios en las universidades estatales. Una vez hubo relajado sus obligaciones financieras en materia de educación el Estado pudo doblar sus esfuerzos para convertir la enseñanza en un sistema de control ya no sólo de los alumnos, suponiendo que las materias que se les enseña puedan modificar el futuro comportamiento de los jóvenes, sino también de sus padres. En el bloque de reformas lanzadas por el gobierno laborista de Blair se encuentran medidas que prevén el castigo de cárcel contra los padres que no logran evitar que sus hijos falten a clase. Además la policía tendrá poderes para recoger a los menores de la calle aunque no hayan cometido delito alguno (*El País* de 12 de mayo 1998, pág. 24).

Si en el Estado el ciudadano era vigilado de forma continua por las autoridades policiales, cuando desaparezca el Estado las funciones de vigilancia las tendrá que asumir la sociedad misma. Hay que suponer que los que están acostumbrados a ser vigilados continuamente no tendrán inconveniente en hacer de vigilantes asumiendo así un rol que anteriormente estaba restringido a un cuerpo especializado, la policía: Más de uno habrá leído en el Metro de Barcelona este año un anuncio que dice: «Los vigilantes de metro dan seguridad: Vigila tú también». Con esto lo que se espera no es una disminución radical de los viajeros sin billete, sino la creación de una atmósfera de desconfianza mutua en la que todos los pasajeros se sentirán vigilados los unos por los otros.

En el mismo orden de cosas hay que situar dos iniciativas del Ministerio del Interior. La primera, incrementar la presencia de la policía de barrio en las ciudades españolas. Las autoridades presuponen que «a la gente le gusta saber cómo se llama el policía de su barrio», porque la dirección de la policía ha recibido numerosas peticiones de ayuntamientos, diputaciones, asociaciones de ciudadanos y colectivos profesionales que piden que la sea la misma pareja de policía la que patrulle siempre la misma zona. La segunda, crear con carácter experimental un teléfono de denuncias en unos distritos de Madrid, al que pueden llamar gratuitamente los ciudadanos para informar a la policía sobre posibles delitos (*El País* de 18 de mayo de 1998, pág. 26).

Esta forma de socialización de las funciones policiales ha sido en otras circunstancias una de las principales técnicas de gobernar en los sistemas del socialismo real (Lindenberger, 1998).

Aunque el Estado deje de vigilar, por las razones que sea, no se dejará a nadie sin vigilantes, ni siquiera a sus propias instituciones de control social como los medios de comunicación. En el marco de las nuevas instituciones noestatales será la población misma la que vigilará por ejemplo a la televisión. Lo hará no algún organismo estatal sino las mismas amas de casa, naturalmente organizadas en lo que se llama la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Esta organización pidió en mayo de 1998 a las televisiones españolas que «establezcan mecanismos de control para la compra y emisión de programas infantiles. No los jueces, u otros funcionarios del Estado, sino las amas de casa han descubierto que en una sola semana del mes de octubre de 1997 las televisiones cometieron más de cien incumplimientos del Código de Autorregulación por ofrecer imágenes con contenidos anticonstitucionales, racistas, sexistas y violentos» (*El País* 12 de mayo de 1998, pág. 24).

EL NUEVO ORDEN SIMBÓLICO

Cuando el presidente Clinton fracasó en llevar adelante el proyecto de mejorar el sistema de salud pública que patrocinaba su mujer Hilary, todo indicaba que sus esfuerzos en el campo de la política social estaban acabados. Pero no fue así. Contra

lo que se esperaba el presidente Clinton empezó su mandato ofreciendo un proyecto de reformas sociales mucho más trascendental. Sus posibilidades de llevarlo a cabo aumentaron en la medida en que se pudo comprobar que gran parte de ellas eran las mismas que defendían sus adversarios del partido republicano en los comicios a la Representative House en 1994.

El proyecto de Clinton se conoce bajo el nombre *Ending Welfare As We Know It*. Se trata en realidad de una serie de proyectos de reforma que incluyen: 1. tax reform, 2. balanced budget initiatives, 3. medicare reform, 4. welfare reform, 5. review of immigration laws, and 5. campaign finance reform. A todas estas materias aparentemente tan diversas les une un denominador común: el de introducir un nuevo orden simbólico, para lo cual ha sido decisivo el dar un nuevo significado a la palabra «welfare». Según el diccionario Webster *welfare* significa «el estado en que las cosas te van bien especialmente en lo que se refiere a la buena fortuna, felicidad o prosperidad». Pero la *Welfare reform* cambia este significado, de hecho ya caduco para una parte de los norteamericanos desde hace tiempo. Desde que en agosto de 1996 el presidente Clinton consiguió con la nueva ley acabar con el Estado de bienestar (*Ending Welfare As We Know It*) tal como había prometido en 1992, la palabra *welfare* se utiliza para referirse a los pobres. Probablemente a partir de ahora la palabra *Welfare* será una entrada en los diccionarios de lengua inglesa que irá acompañada de la nota «véase *Poor*».

Pero no se trata de un mero detalle de la historia de la lengua sino de un importante episodio en la instauración de la estigmatización como una de las principales técnicas de gobierno. En efecto, a parte de que la nueva legislación recortó el alcance de las ayudas en términos reales, su principal función hay que medirla en términos de su significado simbólico (Peterson, 1997). La nueva política social que dirige Clinton tiene como objetivo marginar a los pobres por la vía de la estigmatización moral. A los que reciben las ayudas no sólo se les califica de «poor», o «dependent», sino se les clasifica en grupos: «madres del bienestar», moralmente dudosas, y «madres del no-bienestar», moralmente buenas, por ejemplo.

La vieja política social de Roosevelt y Johnson clasificaba a los pobres como temporalmente desafortunados desde el punto de vista estrictamente económico. La nueva de ley de Clinton les marca en términos morales. La ayuda que se compromete a ofrecer el gobierno está destinada a personas que por reunir una serie de condiciones se convierten en portadores de unas desviaciones de los roles que los gobernantes consideran como normales. Al operar con argumentos éticos los gobernantes consiguen de paso constituir simbólicamente la supuesta mayoría de la sociedad norteamericana a la que extienden el certificado de moralidad. A los que no reciben ayudas sociales se les estampa el sello de buenos.

EL DISCURSO RACISTA

La marginación de las madres solteras que contempla la nueva ley se puede muy fácilmente identificar con prejuicios raciales, como se refleja en el lenguaje de algunos líderes políticos que parecen «señalar a las mujeres pobres, especialmente de las minorías, como la fuente de todos los problemas de América» (Peterson, 1997, 428). En definitiva, la estigmatización que introduce la nueva legislación lleva a unas prácticas lingüísticas que rozan el trato deshumanizante para con una serie de personas por el hecho de ser «welfare recipients». En cambio los que son «non welfare» pueden disfrutar de su *status* de superioridad, por el mero hecho de no ser dependientes del sistema de la seguridad social (Peterson, 1997, 429).

Sin el debate entorno a la reforma del Estado de bienestar no hubiera sido posible volver a los debates racistas. Si la sociedad americana mayormente acepta la reforma de Clinton es porque ésta propicia el mantener vivos los prejuicios raciales. Tanto por sus contenidos como por sus objetivos la reforma hace veinte años hubiera sido tachada de extremadamente conservadora, propia de los sectores más recalcitrantes y racistas del partido republicano. Pero el cambio cultural que ha traído consigo el multiculturalismo es tan evidente que incluso algunos líderes de la minoría negra que apoyan la reforma no quieren ver que ésta objetivamente atenta contra todos y cada uno de aquellos proyectos que fueron emblemáticos para la *affirmative action* en las décadas anteriores. Las medidas de la reforma recogidas bajo el lema «Putting welfare recipients to work» en realidad no significan otra cosa que hacer que las mujeres de raza negra que en solitario tienen a su cargo hijos se incorporen inmediatamente a la vida laboral y en condiciones de un contrato laboral precario.

El debate entorno a la reforma del Estado de bienestar hace políticamente correctos una serie de temas que aparentemente habían sido eliminados del debate público hace tiempo como, por ejemplo, la desproporcionada representación de la minoría negra en las estadísticas del crimen con violencia bautizado como «Black-on-Black Violence». Los negros, que suman menos del 13 por 100 de la población, suman más del 45 por 100 de todos los homicidios conyugales. Las mujeres negras jóvenes que viven en las ciudades y no han estado nunca casadas son las que tienen más probabilidad de ser agredidas y asesinadas por hombres de raza negra conocidos o desconocidos (Clarke, 1996, 46). En otras explicaciones de este tópico racista se añaden argumentos de base biológica y hormonal, que relacionan la mayor fertilidad y actividad sexual de las mujeres negras con su tendencia más proclive a la inestabilidad conyugal y a los embarazos de adolescentes (Rushton, 1995, 38).

LA IMPOSICIÓN COMUNITARISTA

Muchos piensan erróneamente que el criterio de la inteligencia necesaria para estar en política es, en palabras de F. Scott Fitzgerald, tener la habilidad de mantener dos ideas opuestas en la cabeza y al mismo tiempo no perder la capacidad de acción.

Sin embargo una observación más afinada nos dice que a menudo esas acciones son sólo aparentemente contradictorias, pues arrancan de un mismo estrato ético profundo, que si bien no se oculta no siempre es explicitado.

Tanto Clinton como Blair en su tarea de reformar el Estado de bienestar actúan siguiendo una determinada ética promovida en este caso por el Comunitarismo. Ambos hablan de la «gran crisis del espíritu que se está apoderando del mundo de hoy». Les preocupa la violencia, la criminalidad, el deterioro de la familia, el divorcio, las familias de padre único. Todo esto es propio de lo que han predicado los comunitaristas en la década de los noventa. No sorprende que el lenguaje que Clinton emplea en sus discursos sobre el estado de la nación resuene a la voz de Asalaria MacIntyre que se lamentaba siempre de la ausencia de lo moral en los debates públicos. Algunos de los principales autores de esta corriente siguen incluso estrechamente vinculados a la administración Clinton, como los sociólogos Amitai Etzioni, Robert Bellah y William Galston, y el filósofo canadiense Charles Taylor.

Etzioni, uno de los más influyentes entre ellos, catedrático en la George Washington University y presidente de la creada por él mismo Communitarian Network, explica que no hay una vuelta atrás. No se trata de recuperar el planteamiento de los viejos conservadores que todavía en los cincuenta defendían una moral de base religiosa. El comunitarismo se ofrece como salvación del liberalismo respecto de sí mismo, de su excesiva hostilidad hacia la autoridad, y no como «una nueva manera de pensar sobre las ruinas del liberalismo» (Frohen, 1996, 10). Teme que al abordar las cuestiones morales desde sus bases religiosas se pueden ver amenazados los principios de tolerancia hacia, por ejemplo, los homosexuales y en general cuestionar la validez ética de unos estilos de vida alternativos tan arraigados y respetados en la sociedad actual. Los comunitaristas se atribuyen el papel principal, exclusivo, a la hora de decidir qué es y qué no es moral, por el camino no de la renovación religiosa sino de las reformas en el funcionamiento de las instituciones del Estado de bienestar. El único orden que admiten es el «orden espontáneo» que van desarrollando los individuos racionales. Basta con proteger a estos individuos de cualquier tipo de agresión «bárbara», es decir, procedente de cualquier elemento ajeno al «establishment» moral de esta sociedad, entre ellos la religión siempre que entre en conflicto con dicho establishment. En realidad los comunitaristas no se enfrentan a la religión sino que la utilizan como su principal método de acción política. La llaman «new liberal civil religion» (Frohen, 1996, 14) y esperan de ella que «nos instile una fe en la fuente civil o, mejor, política de nuestra moralidad; que el amor de las naciones sea tan natural como el amor de la familia, y que es impío dejar de actuar según este amor más abstracto» (Frohen, 1996, 16). Su religión no puede ser otra que la diseñada por los maestros del liberalismo pues éstos pusieron en duda tanto la noción de derecho natural como la autoridad de las costumbres.

La reforma del Estado de bienestar es para ellos el medio para finalmente conseguir estos tan deseados objetivos morales. La reforma demuestra además la plena coincidencia entre el planteamiento de Clinton, Blair y de los comunitaristas.

Amitai Etzioni en unas reflexiones para *The Times* inmediatamente después de la victoria electoral de los laboristas de 1997 indicaba que los comunitaristas siguen el famoso lema de Kennedy: «do not ask what your country can do for you, bat what you can do for yourself, your close ones and your community». Los comunitaristas creen en el valor de la responsabilidad y miran con satisfacción cómo tanto Clinton como Blair piden responsabilidades a los *welfare recipients*. Al mismo tiempo responden positivamente a las iniciativas de estos políticos de reformar el Estado de bienestar. A propósito del antagonismo entre el comunitarismo y el Estado de bienestar tal como se ha entendido hasta ahora Etzioni decía lo siguiente: «Se necesita la cultura comunitarista para sustituir la noción de derecho del Estado de bienestar —que si uno paga sus impuestos el Estado atenderá las necesidades de uno desde la cuna hasta la tumba— sin olvidar que para que el barco del Estado avance todo el mundo ha de darle a los remos» (*The Times* 21 de junio 1997, pág. 20).

Etzioni puntualiza que en sí no es partidario de la sustitución del Estado de bienestar por un ejército de voluntarios, pero sí ve con buenos ojos que «A personas con cáncer, SIDA, alcoholismo, Alzheimer y otras formas de enfermedades mentales les vaya mejor (y cuesten menos) cuando se meten en grupos de ayuda mutua». No se trata de apostar por una u otra medida. Lo que está en juego es una nueva ética que el mismo Blair define así: «La base de esta nueva sociedad civil es una ética de mutua responsabilidad y deber. Es algo a cambio de algo. Una sociedad donde jugamos ateniéndonos a la regla de que sólo sacas si antes pones» (Blair, 1997, 549).

LAS EXPECTATIVAS FEMINISTAS

La reforma del Estado de bienestar parte de unos presupuestos utópicos de los cuales la utopía feminista tiene valor especial. En la perspectiva feminista el Estado de bienestar, tal como lo hemos conocido hasta ahora, lo han creado los hombres y no las mujeres. Una vez que éstas hayan recuperado su rol volverán a exigir que desaparezca también el monumento de masculinidad que ha sido desde siempre el Estado de bienestar.

Theda Skocpol en su libro *Los orígenes de la política social en Estados Unidos* ha demostrado que la moderna previsión social en Estados Unidos no comenzó, como muchos piensan, con la Ley de la Seguridad Social de 1935 sino mucho antes. Desde la década de 1870 se establecieron costosas pensiones para ayudar a los veteranos de guerra del ejército de la unión y sus descendientes. Skocpol puso en evidencia que en Estados Unidos y en todas partes las políticas sociales no se han desarrollado como consecuencia de la industrialización capitalista o de la urbanización y tampoco han sido respuestas directas a las demandas sociales que las clases sociales emergentes planteaban a los gobernantes sino respuestas a las demandas de género. El Estado de bienestar es un invento de los hombres.

En su investigación queda claro que lo que ha distinguido a las políticas sociales de Estados Unidos a lo largo de todo el siglo xx es su concentración en la solidaridad

de género por encima de la supuesta solidaridad de clase económica (Skocpol, 1996, 684). Las medidas de protección que empleaba el gobierno norteamericano no tenían nada que ver con la política socialdemócrata de la conciencia de clase obrera en Europa.

Si hoy en día el Estado de bienestar no encuentra justificación como antes, es porque ha desaparecido aquella base de solidaridad que sienten para con ellas mismas las personas del mismo sexo. Theda Skocpol resumió esa base sexista de la política social norteamericana en el título de su libro: *Protecting Soldiers and Mothers* (Skocpol, 1996). Una sociedad de varones que ya no van a las guerras, ni siquiera hacen la mili, tiene pocas probabilidades de desarrollar aquel tipo de solidaridad que nace sólo entre los excombatientes, y entre sus esposas, viudas y huérfanos. Resumiendo, no es la economía salvaje global la que minó las bases del Estado de bienestar, sino la pérdida de fe en el valor de solidaridad entre las personas del mismo género.

Desde la militancia feminista no hay lugar para la «male-dominated polis». Lo que hay que conseguir es que todo lo que ha sido *polis* sea sustituido por *oikos*, considerada siempre como la esfera donde domina la mujer.

LA INFERENCIA DE NEW AGE

La retirada del Estado de sus responsabilidades en la materia de bienestar es también un eslabón más en la vía de globalización en que Occidente va perdiendo los elementos esenciales de su identidad como civilización. Si los japoneses no tienen Estado de bienestar, no es porque no tengan necesidades de bienestar sino porque no han asumido la idea del Estado como tal. Entre tantas definiciones de Estado habría que recordar la de Max Weber, la que dice que sólo en Occidente pudo ser inventado. Por lo tanto Occidente sin Estado será menos distinto, más global. Ese nuevo Occidente es el que quieren los profetas del *new age*.

En su planteamiento no hay lugar para la imposición de la voluntad política desde fuera, desde el Estado, sino desde dentro, desde la interioridad, desde la espiritualidad. El mundo si quiere mejorar tendrá que hacerlo sirviéndose sólo de la energía espiritual. Y ésta no está al alcance de los Estados, cuyas bases en su origen fueron definidas por el conflicto. A la armonía no se puede llegar por la vía de la política, que es el dominio de los Estados, sino por el método de síntesis que ofrece el *governance*.

Los ideólogos del *new age* creen en la voluntad divina y ésta según ellos ya no cuenta con los Estados porque ve la humanidad como una entidad global que urgentemente necesita renovación espiritual y ecológica a la vez. El Estado es el elemento que distorsiona la armonía del *new age* y su pronta eliminación resultaría la máxima satisfacción de los que creen en el *Post-Christian ethos*.

Las reformas del Estado de bienestar en los años noventa no son pues un simple reconocimiento de la validez de las críticas liberales de las décadas anteriores, sino

un paso importante en la edificación del nuevo *Imperium Mundi*. Lo que lleva el nombre de reforma del Estado de bienestar no tiene mucho que ver con la preocupación por el bienestar, ni mucho menos con la preocupación por el futuro de la economía. Lo que se llama *ending welfare as we know it*, es en realidad la estrategia pensada para destruir el Estado como tal y en su lugar poner un nuevo sistema de poder, que podría tener el nombre de Control.

Habría que preguntarse si cuando se emiten juicios de que está en peligro el bienestar y se aconseja que para preservarlo la gente apruebe el sacrificio del Estado, no se está pidiendo a gritos en realidad que se ponga en marcha el Control.

El bienestar que aseguraba el Estado era para compartirlo entre los que se consideraban iguales. El bienestar que administraría el Control permitiría reconstruir un poder universal. No hay que olvidar que lo propio del sistema de poder que se empleaba en el Imperio Romano era controlar a los que no eran romanos por ser esclavos o ser bárbaros. El viejo bienestar estatal lo crearon ciudadanos que eran iguales. El bienestar que ha de proporcionar el Control tiene reminiscencias de aquel que ofrecían en el pasado los emperadores romanos, quienes pensaban que una cosa no se podía negar ni siquiera a quienes no eran ciudadanos de Roma: la justicia.

Una vez logrado el fin del Estado los políticos, esos profesionales del poder, se volverán más peligrosos. Es lógico. El poder, al prescindir del Estado, al no querer saber nada de la Política, lo primero que hará es precisamente someter a la más estricta vigilancia a aquellas personas que están más próximas a aquel poder que no tendrá ya que tener ni nombres ni apellidos, que no necesitará ningún tipo de justificación, ni ética, ni religiosa ni mítica.

Si efectivamente es factible gobernar sin Estado, entonces sobran los hombres de Estado. No hace falta mucha suspicacia para sospechar que ellos más que nadie serán quienes con más facilidad podrán escapar del Control. Será necesario, pues, controlarlos más estrechamente. Así, cuando vemos a los políticos rodeados de las fuerzas del orden, tenemos que pensar que en realidad por encima de salvaguardar la integridad de sus cuerpos y la de sus familias, lo que se pretende es controlarlos. Los políticos de hoy no son las personas mejor protegidas, como suele creerse, sino las más observadas, las mejor controladas. Su vida personal, sus intereses económicos, todo lo que es suyo está siendo constantemente escudriñado.

Las principales labores de vigilancia no las desempeñan los electores, como se podría deducir de las normas de funcionamiento de la democracia —en ese caso sólo se vigilaría una vez cada cuatro o cinco años— sino el bicéfalo compuesto por justicia y comunicación. Esta labor tiene ya un carácter rutinario y se realiza por ejemplo a través de las diversas secciones de la prensa diaria, como son «el semáforo» de *La Vanguardia*, o los informes mensuales de popularidad ofrecidos por las agencias de demoscopia.

En esto el Control se aproxima a lo que fue el poder en la Monarquía hispana en el siglo xvii. Las funciones que hoy en día desempeñan la justicia y los medios de comunicación las desempeñaba entonces la Inquisición. Entre las personas que fueron procesadas se encontraban precisamente hombres poderosos. Entre ellos, por

citar a alguno, Jerónimo de Villanueva «el segundo hombre más poderoso de la Monarquía hispánica», cuyo procesamiento por la Inquisición fue analizado recientemente por el historiador Carlos Puyol Buil (1993). En sus conclusiones el autor resume así la causa principal de dicho procesamiento: «Pero su mayor delito fue haber tenido poder. Poder para crear muchos enemigos e innumerables falsos amigos, poder para suscitar odios, envidias, pasiones contra él, poder para forzar la inmunidad de los instituciones sagradas, poder para acallar a los opositores, para comprar a sus defensores, poder para fundar un convento, poder para adecuar la religión a sus criterios y no sus criterios a la religión» (Puyol Buil, 1993, 712).

Si la Monarquía hispánica hubiera sido un Estado y no un Imperio, muy probablemente aunque algunos de sus políticos hubieran conseguido acumular gran cantidad de poder, no habrían sido nunca acusados de un delito.

Del mismo modo, podemos decir que si la España de hoy fuese de verdad un Estado, aunque alguien acumularse tanto poder como el que acumularon Mario Conde y José Barrionuevo, no sería procesado por el Control. ¿De qué se les acusa a éstos? ¿Cuál es su delito? Aparentemente el mismo del que se acusaba a Jerónimo de Villanueva, como dice Carlos Puyol, del delito de haber sido poderosos. El poder a que aspiran los hombres de Estado es algo que le resulta intolerable al Control.

CONCLUSIÓN

El Estado de bienestar era un híbrido, tenía que ser la tercera vía entre el socialismo planificador y el capitalismo del mercado libre, un socialismo democrático o un liberalismo social. El fin de la guerra fría terminó con aquella búsqueda ingenua, y a su vez abrió la puerta a otros experimentos. La eliminación del Estado, con la excusa de reformar el Estado de bienestar, es quizá uno de los más audaces. Pero esto supone ni más ni menos que un insólito intento de crear una nueva institución del poder no sólo sin Estado sino también sin Política. A la vez se trata de un intento de redefinir la Sociedad de tal manera que el Contrato Social tampoco sea su base institucional.

Todo esto conduce a la recuperación de la sociedad en su estado natural. Pero para que los hombres ya liberados del Estado no luchen unos contra otros, tendrán que vigilarse mutuamente. Así reaparece el Control como el resultado de la pugna entre el Estado y el Bienestar. La reforma del Estado de bienestar, pues, compone una nueva anatomía política donde tiene que desaparecer la soberanía, que pasará a ser sustituida por las relaciones de disciplina.

En el debate sobre el Estado de bienestar se suele poner el acento, con una intención cuando menos equívoca, en la disyuntiva bienestar-Estado. Sin embargo lo que está en juego no es tanto el futuro del bienestar como el futuro del Estado. Si en un plazo de tiempo relativamente corto se dejan de pagar las pensiones eso no será porque no habrá dinero, sino porque el Estado como tal habrá dejado de existir.

Es cierto que ha habido Estados que no han ofrecido bienestar, pero también lo es que, sin Estado, no hubiera sido posible diseñar el Estado del bienestar. Por lo tanto con «menos» Estado o con el «mínimo» Estado no se tiene ninguna garantía de tener el mínimo de bienestar. No tiene fundamento la afirmación de que con «menos» Estado habrá «más» bienestar. El Estado de bienestar no fue pensado en ningún momento como un servicio que tenía que proporcionar bienestar a la gente. El Estado, con o sin bienestar, ha sido siempre una fórmula para articular el poder y a la vez garantizar la libertad. Si en Oriente no hay Estado de bienestar, no es porque la gente allá tenga otros sistemas sociales de protección alternativos, sino porque no han entrado en la lógica de que el Estado tenga la misión de garantizar la libertad —que no el bienestar. De la pugna entre el Estado y el bienestar no saldrán vencedores, en todo caso sólo un perdedor: la libertad, que se verá privada de las garantías institucionales que hasta ahora la protegían.

BIBLIOGRAFÍA

- BARRY, NORMAN: «Conservative Thought and the Welfare State», *Political Studies*, 1997, 45: 331-345.
- BEL, GERMÀ: «Desigualdad social, redistribución y Estado de bienestar», *Sistema*, 1997, 137: 81-91.
- BENTHAM, JEREMY: *Escritos económicos. Selección y prólogo de W. Stark*, Fondo de Cultura Económica, México, 1965.
- BLAIR, TONY: «Welfare Reform. Giving People the Will to Win», *Vital Speeches of the Day*, 1997 (July 1): 549-552.
- BOGGS, CARL: «The great retreat: Decline of the public sphere in late twentieth-century America», *Theory and Society*, 1997, 26 (December): 741-780.
- BROCHERT, JENS: «Welfare State. Retrenchment: Palaying the National Card», *Critical Review*, 1996, 10 (Winter): 63-94.
- BOSCH, GERHARD y STEFFEN LEHNDORFF: «La reducción de la jornada de trabajo y el empleo», *Papeles de Economía Española*, 1997, 72: 342-365.
- BRITTON, ANDREW: «El pleno empleo en los países industrializados», *Revista Internacional del Trabajo*, 1997, 116 (otoño): 317-341.
- CASTELLO BRANCO, MARTA: *Pension Reform in the Baltics, Russia, and other Countries of the Former Soviet Union (BRO)*, International Monetary Found European II Department (IMF Working Paper WP/98/11), Washington, 1998.
- CLARKE, JAMES: «Black-on-Black Violence», *Society*, 1996, 33 (July-August): 46-50.
- COX, ROBERT HENRY: «The Consequences of Welfare Retrenchment in Danemark», *Politics & Society*, 1997, 25 (September): 303-326.
- FOUCAULT, MICHEL: *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*, Siglo XXI, Madrid, 1996 [1976].
- FROHNEN, BRUCE: *The New Communitarians and the Crisis of Modern Liberalism*, University Press of Kansas, Kansas, 1996.
- GIDDENS, ANTHONY: «After the left's paralysis», *New Statesman* (1 May): 18-21.

- GORE, AL: *Federal Welfare-to-Work Commitments*, Vice President of the United States, Washington, 1997.
- GUERON, JUDITH M.: «A Research Context for Welfare Reform», *Journal of Policy Analysis and Management*, 1996, 15 (n. 4): 547-561.
- KOSLOWSKI, PETER: «The Social State in the Post-Modern», en Peter Koslowski and Andreas Follesdal (eds.) *Restructuring the Welfare State*. Springer-Verlag, Berlín, 1996.
- LINDENBERGER, THOMAS, «La Police Populaire de la RDA de 1952 à 1958. Une micro-étude sur la gouvernementalité de l'Etat socialiste», *Annales Histoire, Sciences Sociales*, 1998, 53 (Janvier-Février): 119-137.
- MARSHAL, T. H.: *The Right to Welfare and other Essays*, Free Press, New York, 1981.
- MESA-LAGO, CARMELO: «Social Welfare Reform in the Context of Economic-Political Liberalization: Latin American Cases», *World Development*, 1997, 25 (n. 4): 497-517.
- MICHELL, OLIVIA S. and FLAVIO ATALIBA BARRETO: *After Chile, What? Second-Pound Pensions Reform in Latin America*, The National Bureau of Economic Research. Working Paper (December) 6311, Cambridge, 1997.
- MOLINAS BELLIDO, ALFREDO: «Prólogo» en Alfred Molinas y otros, *El Estado de Bienestar sostenible*, Societat d'Estudis Econòmics, Barcelona, 1996, págs. 3-5.
- MONTORO ROMERO, CRISTÓBAL y RICARDO MONTORO ROMERO: «Del Estado de bienestar a la sociedad del bienestar», Ramón Casilda Béjar, José María Tortosa (editores), *Pros y contras del Estado de bienestar*, Tecnos, Madrid, 1996, págs. 75-99.
- MURRAY, CHARLES: «Does welfare bring more babies?», *The Public Interest*, 1994, 115 (Spring): 17-30.
- NOLAN, JOSEPH: «Healing Medicare and Stabilizing Social Security. Two Defining Economic Issues for the 21st Century», *Vital Speeches of the Day*, 1997 (May 1): 430-434.
- PENDAS GARCÍA, BENIGNO: *Jeremy Bentham: Política y Derecho en los orígenes del Estado Constitucional*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988.
- PETERSON, JANICE: «"Ending Welfare As We Know It": The Symbolic Importance of Welfare Policy in America», *Journal of Economic Issues*, 1997, 31 (June): 425-431.
- PUYOL BUIL, CARLOS: *Inquisición y política en el Reinado de Felipe. Los procesos de Jerónimo de Villanueva y las monjas de San Plácido 1628-1660*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1993.
- ROBERTS, DAVID: «Jeremy Bentham and the Victorian Administrative State», en BHIKHU PAREKH (ed.): *Jeremy Bentham Then Critical Essays*, Frank Cass, London, 1974, 187-204.
- RUSHTON, J. PHILIPPE: «Race and Crime: An International Dilema», *Society*, 1995, 32 (January-February): 37-41.
- SELDEN, MARK and LAIYIN YOU: «The Reform of Social Welfare in China», *World Development*, 1997, 25 (n. 10): 1657-1668.
- SEMPELE, JANET: *Bentham's Prison. A Study of the Panopticon penitentiary*, Clarendon Press, Oxford, 1993.
- SHLAPENTOKH, VLADIMIR: «Early Fudalism -The Best Parallel for Contemporary Russia», *Euro-pa-Asia Studies*, 1996, 48 (n. 3): 393-411.
- SHONKOFF, JACK P.: *Statement on Key Welfare Reform Issues. The Empirical Evidence*, Center on Hunger and Nutrition Policy, Washington, 1995.
- SKOCPOL, THEDA: *Los orígenes de la política social en Estados Unidos*, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1996 (1992).
- STARK, W.: «Prólogo» en Jeremy Bentham, *Escritos económicos. Selección y prólogo de W. Stark*, Fondo de Cultura Económica, México, 1965, VII-XXXI.

- WILSON, JAMES Q.: «Human remedies for social disorders», *The Public Interest*, 1998, 131 (Spring): 25-35.
- WILLETTS, DAVID: *Modern Conservatism*, Penguin, Harmondsworth, 1992.
- WILDING, PAUL: «The Welfare State and the Conservatives», *Political Studies*, 1997, 45: 716-726.
- WISEMAN, MICHAEL: «State Strategies for Welfare Reform: The Wisconsin Story», *Journal of Policy Analysis and Management*, 1996, 15 (n. 4): 515-546.